

Argentina

Logística de la regresión

Mario V. GUZMAN GALARZA

En la cena anual de los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, que se realizó el viernes 3 de julio, en vez del discurso tradicional que se pronuncia a los postres y en presencia del presidente Viola, se leyó un documento que encierra una de las críticas más duras al gobierno actual. En dicho texto, los oficiales señalan que "todo parece indicar que marchamos con rumbo equivocado y con riesgos de retornar a épocas que creíamos definitivamente superadas", aludiendo seguramente al llamado "diálogo político" y a las actividades que despliegan los partidos políticos, en particular, al resurgimiento del Movimiento Justicialista que fuera creado por Juan Domingo Perón.

Para cerrar el paso a cualquier proyecto aperturista, los oficiales diseñaron la logística del plan de regresión política, que lleva a cabo desde hace cinco años, advirtiendo a Viola sobre la necesidad de "abandonar el tránsito por terrenos contaminados tanto en lo ideológico como en lo político y económico para evitar la propia contaminación", razón por la cual exigieron la marginación de "los perjuros que no cesarán de halagarnos los oídos para luego servirse de nosotros, como ya lo hicieron, en la búsqueda de sus sucios objetivos". Con este lenguaje agresivo, los "puros" que influyen sobre los sectores duros y más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, demandaron la proscripción del peronismo que, a pesar de todo, sigue siendo la fuerza política más importante del país.

La retórica de la intolerancia, sin embargo, no puede disfrazar a la ya conocida imagen de la dictadura militar argentina con la vestidura de la pureza, porque nadie ignora que los perjuros son los que traicionaron su juramento de defender la Constitución y de velar por los intereses de la nación y del pueblo, para instalar por la fuerza un régimen brutalmente autoritario que desató la guerra interna más sucia que registra la historia del país, contaminándolo todo, en especial a las Fuerzas Armadas, con la ideología del neofascismo que surge en el marco de la dependencia, sobre la base de la seguridad nacional, como expresión política de la llamada "reserva de Occidente" que constituye, sin duda alguna, el más descarado y siniestro proyecto de regresión política que, independientemente de su repercusión interna y con una concepción maniqueísta de las relaciones internacionales, pretende subordinar a las naciones de América Latina bajo la égida del poder imperial, para luchar a muerte contra los enemigos de la bienaventurada "civilización cristiana occidental", como parte de un supuesto compromiso nacional histórico que justificaría la delegación de un rol hegemónico a la nación argentina en el Cono Sur.

EL DESASTRE NACIONAL

Los sueños de grandeza, empero, se desvanecen frente a la dimensión del desastre que padece el país en todos los órdenes de la vida nacional. Por ello, los comandantes en jefe de las tres armas disertan sobre los problemas nacionales con "crudo realismo", pero no resuelven nada, en tanto que el gobierno de Viola ahonda las diferencias y las injusticias sociales, caracterizando con la profundidad de los abismos la irritante desigualdad en el reparto de la riqueza y en las oportunidades para asegurarse un futuro mejor. Por esto mismo, si los oficiales retirados hablan de "objetivos sucios" tendrán que reconocer que la miseria provocada por la política económica de la dictadura militar es uno de ellos, no evano la incontrolable espiral inflacionaria llegó en junio pasado al 9.4 por ciento. Y otro, tan sucio como el anterior, es el que propone un antiguo colaborador del ex dictador Juan Carlos Onganía, el ex ministro del Interior Guillermo Borda, cuando advierte que si la crisis económica afectará el esquema de poder, "un golpe militar sería inevitable". Es muy posible que en este sentido ya estén trabajando los oficiales retirados, planteando una logística para afirmar la regresión política que, después de todo, no es más que parte del arte militar que comprende lo relativo a la ejecución de las operaciones de guerra.

Los trabajadores están concientes de la crisis nacional y de las amenazas contra los derechos e intereses del pueblo argentino. Por esta razón ya han denunciado a los responsables del encarecimiento del costo de la vida, del cierre de las industrias, de la hiperinflación y de abultado crecimiento de la desocupación. En "estado de emergencia", la mayoría de los sindicatos han planteado sus demandas de aumento salarial y exigen además, la creación de nuevas fuentes de trabajo. Y la Confederación General de Trabajadores (CGT), hizo saber que en la primera quincena del presente mes de julio se realizará una "jornada nacional de protesta", ante el agravamiento de problema social. El Sindicato de Mecánicos y Afines (SMATA), por su parte volvió a clamar justicia en vista de que el 40 por ciento de los trabajadores de la industria automotriz, alrededor de 35 mi-

obreros perdieron el empleo en cinco años de gobierno militar.

Para los empresarios el deterioro económico es mayor cada día, debido a que el país sufre las consecuencias de la política económica desarrollada de 1976 a 1981 por el gobierno del general Videla y de su ministro de Economía, José Martínez de Hoz. La inflación, la baja de la productividad, la reducción de los volúmenes de exportación y el encarecimiento del crédito a raíz del aumento de las tasas de interés, el acaparamiento y la especulación, el régimen fiscal y otros factores han determinado el cierre de fábricas, una mayor desocupación y el alza inmoderada del costo de la vida, razón por la que muchos empresarios medianos y pequeños, especialmente, no han podido mantener el ritmo de sus actividades. La situación se agravó el 27 de junio, porque esa mañana, cuando los trabajadores de la fábrica automotriz Borgward ocupaban las instalaciones, para impedir el cierre de sus puertas, el pueblo se desayunaba con la noticia de una nueva devaluación de la moneda, llegando el dólar a una cotización sin precedente de 7 mil 800 pesos.

PERSPECTIVA SOMBRIA

Los trabajadores se encontraron, en consecuencia, frente a una situación verdaderamente dramática. Por un lado, alza de precios y elevación del costo de la vida, por el otro, reducción del valor adquisitivo de la moneda y del siguiente pérdida del valor adquisitivo del salario que no alcanza para nada. No hay compensación alguna ni mucho menos reajuste de salarios. El dólar y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se imponen y pierden los trabajadores. Las actividades económicas se contraen y aumentan los conflictos laborales. Se produce una carrera en las tasas de interés y mientras la banca oficial la fija en 134, por ciento para operaciones a 30 días, los bancos comerciales y algunas instituciones financieras la fijan en 145 y 150 por ciento, respectivamente, para colocaciones a un mes.

Por otra parte, se han producido dos hechos significativos en el agravamiento de la crisis, de un lado el aumento considerable de la desocupación y del otro, el desplazamiento de la población económicamente activa hacia labores improductivas. De acuerdo con el propio ministro de Industria, Eduardo Oxeñford, el 40.1 por ciento de la población económicamente activa está desocupada en forma encubierta o en forma redundante. Esto representaría 4.2 millones de personas, de las cuales 1.7 millones corresponden a la "desocupación encubierta", es decir, de actividades laborales discontinuas, de pocas horas y 2.5 millones de personas, en "desocupación redundante", esto es, que no desempeñan ninguna función racionalmente productiva. El sector más afectado es el industrial, dado que el personal disminuyó de un millón 30 mil obreros trabajando en 1976 a unos 790 mil personas en actividad a fines de 1980. Por ello, se habla de desplazamiento de mano de obra, debido a que miles de trabajadores calificados se ven forzados a convertirse en vendedores ambulantes.

A raíz de esta situación que no tiene, por ahora, perspectivas de mejorar, el Movimiento Justicialista denunció el día 10 de julio, durante un acto de homenaje a Juan Domingo Perón, en el séptimo aniversario de su fallecimiento, que "ha fracasado definitivamente" el proceso iniciado por las Fuerzas Armadas en enero de 1976. En un texto difundido ese día, los peronistas convocaron a la concertación de todas las fuerzas auténticamente representativas de la vida argentina para reconstruir el orden político, económico y social de la República, justificando este llamamiento con "la catástrofe del aparato productivo nacional, el descontrol inflacionario, la magnitud astronómica de la deuda externa, los salarios envilecidos y la desocupación creciente", citados como factores de la crisis en una apretada síntesis de cinco años de dictadura militar.

Al advertir que "el gobierno de las Fuerzas Armadas no podrá afrontar ni resolver por sí solo la crisis que soporta el país, sin duda la más dramática de la Argentina contemporánea", el peronismo señaló que "la obligación histórica de las Fuerzas Armadas consiste en facilitar y concurrir a forjar las grandes convergencias nacionales y populares". A la convocatoria del Movimiento Justicialista respondió con igual planteamiento la Unión Cívica Radical (UCR), por lo que, al comprometerse las dos principales organizaciones políticas de la Argentina, todo parece indicar que está en formación un frente nacional amplio que luchará por la democratización del país, empezando por la modificación de la política económica, el levantamiento del estado de sitio y el restablecimiento del régimen constitucional de garantías, con el concurso de otras fuerzas políticas nacionales y democráticas así como de los sindicatos y del pueblo en general, que ya se moviliza para oponerse a la regresión política.